

# UNA NUEVA POLÍTICA COMPROMETIDA CON EL BIENESTAR Y LA PROSPERIDAD DE LOS ESPAÑOLES

## UNA POLÍTICA ECONÓMICA A LA ALTURA DE LAS LEGÍTIMAS ASPIRACIONES DE LOS ESPAÑOLES

**L**a economía española necesita de un horizonte de certidumbre y confianza para salir de la actual crisis y labrar un futuro de prosperidad, empleo, bienestar y oportunidades para todos. Pero confianza no es algo que los Gobiernos deban pedir a los ciudadanos sino algo que el Gobierno debe proporcionar a los ciudadanos y al resto del mundo. Confianza en las inmensas posibilidades de la sociedad española.

Éste es el objetivo que debe liderar el próximo Gobierno de España:

- Un Gobierno responsable y comprometido con los ciudadanos.
- Un Gobierno consciente de que la actual situación laboral en España sólo merece los calificativos de inaceptable, insostenible e insostenible.
- Un Gobierno que sepa dar cauce a los anhelos de mejora de los ciudadanos españoles en su bienestar.

---

Fernando Navarrete, director de Economía y Políticas Públicas de FAES

- Un Gobierno dispuesto a romper el nudo gordiano de un *statu quo* empobrecedor para dar rienda suelta a las inmensas capacidades de la sociedad, lastradas hoy por una mala política que lo invade todo.

España necesita un nuevo proyecto político. Un proyecto nacional integral que permita elevar la ambición y las expectativas de los españoles. Que devuelva a los españoles la confianza en sus propias capacidades como nación. Un proyecto ilusionante en el que la justicia, la equidad, la generación de oportunidades, la movilidad social y el compromiso con el bienestar deben ser elementos clave para afrontar cohesionada y exitosamente las imprescindibles reformas económicas que España necesita para recuperar la senda de la prosperidad.

Una política de futuro y éxito para España no puede obviar la necesidad de devolver el protagonismo a la sociedad. La imprescindible retirada del sector público de ámbitos de actuación que no le son propios no debe ser vista como una mera consecuencia técnico-económica de la crisis fiscal, y por tanto potencialmente reversible. Por el contrario, debe ser considerada una oportunidad para que la sociedad recupere espacios donde la libre actuación de personas informadas permita una mejor satisfacción de la legítima pluralidad de preferencias frente a la actuación siempre uniformizadora de las Administraciones Públicas. Este proceso de devolución de espacios a los ciudadanos liberará enormes energías sociales hoy agostadas y sometidas al arbitrio del poder.

Esta devolución de protagonismo social, este incremento de los espacios de libertad para los ciudadanos, debe discurrir en paralelo a políticas que proporcionen a los ciudadanos nuevas capacidades y oportunidades. La creación de empleo es la clave de bóveda que hace que cada ciudadano pueda hacerse cargo con confianza de su propio futuro y reclamar nuevos espacios de libertad.

El empleo y las oportunidades para todos deben generar una verdadera, sana e imprescindible movilidad social en España basada en la educación, el mérito y el trabajo. La percepción de justicia en la consecución de los éxitos individuales es el ingrediente básico de la confianza mutua

que cimienta las sociedades cohesionadas que prosperan; las que premian el mérito y el esfuerzo, las que retribuyen la innovación y el talento, las que animan la asunción y gestión prudente de los riesgos. En suma, las sociedades que no se cuestionan permanentemente la licitud del éxito ajeno sino que tratan de emularlo y mejorarlo.

Nada daña más la cohesión social que la sensación de que la cercanía al poder es un elemento importante a la hora de explicar el éxito económico individual. Y nada es más dañino que la combinación de corrupción con unas políticas incentivadoras de las burbujas de activos.

Hoy los españoles somos más pobres y hoy la sociedad española es más injusta porque ofrece menos oportunidades. Oportunidades y movilidad social son la verdadera métrica con la que medir la justicia y cohesión de una sociedad. Hoy por hoy estos dos elementos están ausentes de la realidad española y, lo que es peor, están fuera de la agenda de un Gobierno socialista empeñado en preservar los privilegios de los que nunca pierden, aunque el país esté sumido en el paro masivo.

En las crisis se reparten de nuevo las cartas y la política económica del futuro deberá ser proactiva para que esta vez no haya cartas marcadas. El acceso a las nuevas oportunidades, y las posibilidades de movilidad social basadas en el mérito debieran ser los compromisos de una propuesta política ilusionante para con los desempleados, sus familias, y una generación de jóvenes sobre los que ha recaído desproporcionadamente el coste social de esta crisis.

La meritocracia y la movilidad social permiten que las sociedades dejen de cuestionarse el éxito ajeno para proyectarse hacia la creación de nuevas oportunidades que estarán al alcance del esfuerzo y las capacidades de quienes se arriesguen y trabajen con tesón y acierto.

En las sociedades modernas abiertas al mundo, insertadas en la globalización y en la economía del conocimiento, el progreso depende decisivamente tanto de la capacidad para generar nuevo conocimiento como de aprovechar las oportunidades que proporciona el que se genera en cual-

quier lugar del planeta. El conocimiento, a diferencia de lo que sucede con el capital físico u otros recursos económicos, no agota sus efectos por haber sido ya utilizado por otros, sino que está siempre disponible para todos aquellos que quieran y sepan aprovecharlo en beneficio de la sociedad y, por ende, en el suyo propio. Éste es el motor que debe propulsar la recuperación.

Preparar a los españoles para esta realidad global que ya está entre nosotros, y que está para quedarse, es una tarea en la que las políticas públicas de educación, formación y capacitación tienen un papel importante que desarrollar. Y tienen que hacerlo sobre los principios de mayor libertad de elección en la demanda, mayor pluralidad y competencia en la oferta con un profesorado de excelencia.

La sociedad española debe recuperar la confianza en sus propias posibilidades para competir exitosamente en la economía internacional globalizada. Y para prosperar en un entorno económico mundial que, a pesar de las dificultades que experimentan algunos países occidentales, continúa con un elevado ritmo de crecimiento y sigue ofreciendo oportunidades a todos aquellos que aciertan a aprovecharlas.

Esta crisis ha demostrado que la política importa, y que la política económica importa mucho. Se ha demostrado que el futuro no está predeterminado; que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros; y que fracasos pasados pueden revertirse con políticas distintas, si éstas son aplicadas con decisión y constancia. Esta crisis ha demostrado que hay que trabajar siempre afanosamente, con capacidad de previsión y con prudencia, para marcar una senda de prosperidad. El actual Gobierno socialista no lo hizo y hoy todos los españoles pagamos las consecuencias.

Los españoles se empobrecen y España se empequeñece en la esfera económica y política internacional. Mientras en países muy cercanos con los que compartimos una moneda única, un mercado común y unas políticas comunes, la crisis se salda sin pérdidas netas de empleo; en España, por el contrario, hemos más que duplicado la tasa de desempleo. La crisis del empleo y la falta de oportunidades para los jóvenes configuran un es-

cenario futuro que en nada ayuda a fomentar las inversiones empresariales necesarias para alumbrar los nuevos proyectos que la economía española necesita.

Nada de esto es casualidad. Esta crisis, como todas, generará ganadores y perdedores. Hay que trabajar para que la sociedad española, y en particular sus jóvenes, no sean los grandes perdedores de esta crisis. Pero para eso hace falta una política económica digna de tal nombre. Una política económica previsible que marque un rumbo claro para un futuro de prosperidad. Una política económica que permita que todos los españoles estén en condiciones de competir con éxito en la economía global en el marco de la moneda única europea. Es un reto cuyo objetivo tiene una dimensión global, que está sujeto a condicionantes de ámbito europeo, y que debe ponerse al alcance de cada español.

La política en España no puede seguir siendo un problema para el resto de socios europeos. Esto daña a nuestros socios pero sobre todo daña a los españoles. Daña las condiciones de acceso a la financiación para toda la economía: para el sector público pero, sobre todo, para el sector privado.

No puede ser que empresas españolas perciban que estar en España deteriora sus posibilidades de éxito en la economía global al encarecer sus costes financieros y dañar su reputación. El deterioro internacional en la percepción del riesgo soberano español se está contagiando al conjunto del tejido productivo. El resultado es el encarecimiento diferencial de los costes de financiación del sector privado, lo que supone una genuina desventaja competitiva en los mercados globales. Actualmente las empresas y trabajadores españoles corren en la carrera de la globalización con una pierna atada y, de continuar esta situación, se corre el riesgo de que pierdan la pierna para siempre.

España debe volver a ser la mejor plataforma para que empresas y trabajadores se proyecten al mundo con confianza, con un marco institucional excelente y con acceso a unas condiciones óptimas de financiación. Éste es el reto que nos hemos marcado y el reto que vamos a lograr como país.

España tiene que volver a ser un ancla de estabilidad económica y confianza para la zona euro. Ya lo fuimos durante la anterior crisis económica internacional –llamada de las *punto.com*– en la que la conducción de la política económica en España fue todo un ejemplo. De hecho, una mayoría de españoles ni siquiera recuerda aquella crisis, que sí existió, que fue grave en todos los países de nuestro entorno y de cuya resaca se derivan muchos de los problemas actuales de falta de disciplina fiscal en la eurozona.

España debe asumir plenamente y cumplir ejemplarmente sus compromisos de estabilidad con el resto de socios de la moneda única para recuperar la máxima calidad crediticia y poder acceder en el medio plazo a la financiación en condiciones comparables al de las naciones más prósperas y creíbles de Europa. No hacerlo condenaría a la parte más dinámica e internacionalizada de nuestro tejido productivo a competir en grave desventaja, con la consecuente destrucción de empleo y talento en España.

La sociedad española sabe cómo hacerlo, porque ya lo hizo, y sabe que para ello hace falta urgentemente un nuevo liderazgo político. Visión, determinación y acierto serán las claves del éxito de la política económica del futuro Gobierno que sacará a los españoles del actual abatimiento y los pondrá de nuevo en la carrera del éxito individual y colectivo como país.

La “confianza” se ha convertido en el tótem en el que muchos ponen sus esperanzas de mejora de la economía. Y piden y piden confianza a todas horas... sin entender que el buen gobernante, no pide, sino que tiene confianza en los ciudadanos; no pide, sino que da certidumbre con sus políticas. Porque sólo confiando en los ciudadanos podrán los ciudadanos confiar en la política de sus gobernantes.

En España ya nadie cree en los tótems y nadie cree en el Gobierno socialista. Por eso éste es el momento de un nuevo Gobierno con una política económica verdaderamente eficaz. Con políticas conscientes de la ruinoso herencia pero con una visión de futuro para España y con una clara estrategia para su puesta en marcha.

## UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO, EMPLEO Y BIENESTAR PARA ESPAÑA

Una política económica para España con visión estratégica debe tener siempre presente que el desgobierno socialista ha lastrado el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía española haciéndolo descender desde cifras próximas al entorno del 3% para quedar en apenas un 1,5%. Y esto es cierto más allá de los efectos coyunturales de la crisis, que han sido muy graves y que seguirán afectando a la magnitud y composición del crecimiento en los próximos trimestres.

Así, sin un profundo cambio de las políticas y de las estructuras económicas e institucionales, la economía española apenas podrá generar empleo. Y el empleo que se generase sería un empleo cíclico que, al no ser considerado permanente, tendría un impacto mucho menor sobre las expectativas y las decisiones de ahorro, consumo e inversión.

De aquí se deriva la importancia de una completa agenda de reformas estructurales que modifique las estructuras económicas del país para recuperar un crecimiento potencial sin desequilibrios de la economía española de, al menos, el 3% anual. Eso mejoraría las expectativas de futuro y permitiría la consolidación de un ciclo virtuoso de crecimiento y empleo como el que necesita España.

La tarea de recuperación del potencial de crecimiento de la economía española debe ser la tarea prioritaria de un nuevo proyecto político comprometido con el bienestar de todos los españoles. Porque si bien las malas políticas socialistas han cercenado las oportunidades de los españoles, está en las manos de la sociedad y de un nuevo proyecto político recuperarlas, acrecentarlas y acercarlas a todos.

Además, la recuperación del potencial de crecimiento debe servir para trasladar a los mercados internacionales la percepción de que España vuelve a ser un país con un diferencial de crecimiento económico a largo plazo positivo en comparación con el resto de países de la zona euro. Esta percepción positiva se instaló en los mercados durante muchos años –es-

pecialmente tras haber sorteado España exitosamente la crisis económica internacional de las “punto com” y haber mantenido desde la creación del euro un crecimiento sistemáticamente superior-. Pero debemos ser conscientes de que ahora se ha vuelto a instalar en los mercados internacionales la antigua concepción sobre España como una economía sometida a ciclos más virulentos, con fuertes auges pero también con caídas más abruptas o persistentes. España debe recuperar la credibilidad perdida.

La disminución del potencial de crecimiento a largo plazo de la economía española ha agravado a su vez la percepción negativa acerca de problemas como:

- la sostenibilidad de las cuentas públicas,
- la solvencia y viabilidad de sectores de nuestro sistema financiero,
- la sostenibilidad del endeudamiento de empresas y familias.

La solución duradera a estos problemas depende también de que seamos capaces de restaurar el potencial de crecimiento con una agenda de reformas estructurales que dé un horizonte de prosperidad a los españoles y a los inversores internacionales, y que colabore decisivamente a la recuperación y a la creación de empleo.

No existe palanca más poderosa de mejora que las propias ansias de mejorar. De ahí la importancia de incidir de forma creíble sobre las expectativas de los españoles y de los inversores. Al igual que el buen conductor para evitar los accidentes enfoca su mirada en el tráfico que le precede en lugar de concentrarse en el coche que se sitúa inmediatamente enfrente; del mismo modo la política económica debe centrarse en los problemas estructurales de la economía para ayudar a resolver los graves problemas coyunturales a los que se enfrenta.

El futuro Gobierno debe ofrecer reformas y actuaciones decididas más allá de lo que actualmente anticipan los mercados y nuestros socios europeos. España no puede seguir permitiéndose un Gobierno que anuncia



pasos adelante o da pasos hacia atrás en las reformas según la proximidad al abismo que nos anuncien desde Bruselas o desde los mercados. La “política de la yenka” condena a España a “hacer la goma” en el pelotón de cola de Europa y contribuye a nuestro descrédito internacional.

El compromiso del próximo Gobierno con las reformas y la reducción del déficit público debiera ser total, explícito y estar avalado por el mandato ciudadano. Gracias a este nivel de compromiso se podrá generar la credibilidad y confianza necesarias para elevar las expectativas sobre el futuro de España y abrir el camino de éxito y reformas que merecen los españoles.

Así, por ejemplo, una actuación valiente y decidida en el ámbito de la reforma de las pensiones para garantizar su sostenibilidad futura podría ser un elemento catalizador de una recuperación de la confianza internacional en nuestra economía, sobre todo acerca de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Frente a unas expectativas actuales de “reforma paramétrica” (es decir, modificaciones en la edad legal de jubilación y período de cómputo de las pensiones) sería muy conveniente ofrecer un consenso en torno a una “reforma estructural” del sistema de pensiones, en la línea del “modelo sueco”, que lo dotase de sostenibilidad intrínseca al garantizar su equilibrio actuarial y que lo alejase de decisiones políticas discrecionales “a lo Zapatero”.

Sólo actuando por delante de los acontecimientos y de las expectativas se conseguirán maximizar los beneficios y las grandes oportunidades de un proceso reformista integral y planificado. Seguir a tirones con las reformas condena a la política económica a la subordinación y a la incompreensión de los ciudadanos. En todo caso, una política económica con visión estratégica y consciente de las demandas del momento debe atender simultáneamente los siguientes tres ejes:

- la estabilidad macroeconómica en el contexto de la Unión Económica y Monetaria;
- la competitividad, la flexibilidad y unidad de los mercados;
- y la movilidad social y el bienestar.

Para ello se hace imprescindible un plan de actuación integral en las siguientes áreas prioritarias:

- Una reforma laboral que ponga fin a la dualidad y permita la creación de empleo “desde el minuto uno de la recuperación”.
- Las reformas del sector financiero que permitan el acceso del sector privado a una financiación en condiciones internacionalmente competitivas.
- Una ambiciosa agenda de competitividad para la creación de empleo y de tejido empresarial.
- Una política fiscal y presupuestaria decidida a atajar el déficit estructural de las cuentas públicas y la reinversión del Estado del bienestar en una Sociedad del bienestar sostenible y justa.

### LA REFORMA LABORAL GENERADORA DE EMPLEO

Terminar con el paro estructural y el desempleo juvenil será una de las claves para devolver a España a la senda de la prosperidad. Para ello, España necesita un crecimiento con abundante creación de empleo “desde el minuto uno” de la recuperación. Y necesita que sea una creación de empleo estructural y duradera para que pueda desencadenar un ciclo virtuoso de crecimiento y empleo gracias a unas mejores expectativas de futuro. Sólo la fuerte creación de empleo dará una señal observable inequívoca de que España está en la senda de recuperar su potencial de crecimiento a largo plazo. Por ello, una inmediata, verdadera y profunda reforma laboral resulta imprescindible.

Las actuales rigideces del mercado de trabajo español impiden la rápida y eficiente reasignación del empleo entre empresas y sectores prolongando el estancamiento, deteriorando el potencial de crecimiento e impidiendo que la recuperación sea generadora de empleo. El mal funcionamiento del mercado de trabajo durante la crisis ha expulsado a más de dos millones y medio de personas que, en su mayoría y por las rigideces

laborales, no tienen perspectivas de encontrar un empleo. Así, se ha enquistado el paro en España y se ha expulsado masivamente a los más jóvenes de las oportunidades económicas y vitales que ofrece un empleo.

La estructura de negociación colectiva entre patronal y sindicatos, y la falta de flexibilidad interna en las empresas propiciada por la regulación laboral, han impedido que las empresas pudieran realizar, vía movilidad, salarios u horas trabajadas, parte del ajuste derivado de la caída de la demanda. Ello ha forzado a un ajuste total por la vía socialmente más traumática y económicamente ineficiente: la destrucción neta de empleo y de tejido empresarial.

La dualidad del mercado de trabajo español se manifiesta en la existencia de unos trabajadores atrincherados detrás de otros que se encuentran inermes ante la inflexibilidad salarial y en las condiciones laborales que los primeros negocian en los convenios colectivos en nombre de todos. Así, el 95% de los despidos durante la crisis ha recaído sobre los trabajadores no atrincherados y utilizados como parapeto. Las únicas válvulas de escape que la regulación del mercado de trabajo español y la negociación colectiva han dejado para acomodar el impacto de la crisis han sido:

- la no renovación de los contratos temporales,
- el despido de aquellos trabajadores con un menor tiempo de permanencia en su última empresa (bien por ser jóvenes o por haber “osado” cambiar de empleo para buscar nuevos horizontes profesionales),
- y el bloqueo del acceso al mundo laboral a toda una cohorte de jóvenes que intentaban encontrar empleo por primera vez.

Todo este proceso de ajuste se ha hecho de espaldas a cualquier consideración sobre la productividad, esfuerzo, compromiso y capacidad de cada uno de los trabajadores. Ha estado dirigido fundamentalmente por consideraciones “regulatorias” del mercado de trabajo acerca del coste relativo del despido. Este ajuste vía empleo en la economía no sólo ha sido profundamente injusto sino económicamente ineficiente.

La pérdida de capital humano ha sido ingente. De hecho, el capital humano de aquellos jóvenes que ni siquiera pueden acceder al mercado de trabajo es el que más rápidamente se deteriora. Y no es un capital humano cualquiera. Es el capital de la generación en la que la sociedad española ha invertido más recursos para su formación.

La gestión política de esta inversión social ha sido la más ruinosa de esta crisis y la que tendrá peores consecuencias para el futuro. El mensaje que la realidad ha lanzado a los jóvenes es nítido: “la educación no se paga en España”. No lo hizo durante el auge y tampoco lo hace durante la crisis. Frente a esto, los mensajes voluntaristas en favor de la educación y la formación carecen de efectividad, salvo que se afronte una verdadera reforma laboral en España.

Esta situación demanda una profunda reforma laboral que acabe con la dualidad y que saque el marco de relaciones laborales del viejo paradigma de la estabilidad del puesto de trabajo –que responde a un entorno económico cerrado y rígido– y lo lleve hacia el de la estabilidad del trabajador en el empleo gracias a su empleabilidad. Éste se ha demostrado como un modo exitoso para dotar a empresas y trabajadores de la necesaria flexibilidad y confianza para competir en los mercados globales desde economías abiertas al mundo.

### **LAS REFORMAS EN EL SECTOR FINANCIERO PARA FINANCIAR LA RECUPERACIÓN**

La crisis ha convertido en obsoletas muchas de las inversiones realizadas al calor de las burbujas de activos y de expectativas irrealizables. Todavía en este momento se encuentra pendiente una importante reasignación de factores productivos entre empresas y sectores. Este proceso de reasignación, para ser llevado a cabo eficientemente, requiere también del concurso de un sistema financiero –especialmente bancario– eficiente y bien capitalizado, que pueda pasar de la actual situación de “gestión de su balance” hacia la “asunción prudente de nuevos riesgos con el sector privado”.

El potencial de crecimiento de la economía española también se ha visto disminuido por el deterioro estructural de las condiciones de financiación al sector privado, que impide que surjan y se consoliden nuevos proyectos empresariales y que se reasignen los factores productivos.

La recapitalización del sistema bancario resulta esencial para que pueda cumplir adecuadamente sus funciones. Para ello deberá ponerse en marcha inmediatamente un programa de reestructuración y recapitalización del sector financiero sobre la base de un mecanismo de colaboración público-privado en el que las eventuales aportaciones del sector público sirvan exclusivamente para suplementar las imprescindibles aportaciones de capital privado (nacional o extranjero) en aquellas instituciones (Bancos o Cajas) que, aún teniendo problemas de solvencia, demuestren poseer un modelo de negocio viable capaz de atraer el interés de los inversores. Para ello deberán desaparecer los límites, vetos y restricciones a la entrada de capital privado y a las tomas de control en las Cajas de Ahorros.

## UNA AMBICIOSA AGENDA DE COMPETITIVIDAD

La economía española ha sentido con toda su crudeza en esta crisis que, a pesar de la pertenencia a la zona euro, siguen existiendo las tradicionalmente denominadas “restricciones externas al crecimiento”. Y a pesar de la dureza del ajuste sufrido por la economía española, los problemas de competitividad apenas han mejorado. Por ello se hace necesaria una ambiciosa agenda de competitividad que transforme el marco institucional y el entorno en el que se desenvuelve la actividad empresarial.

Las reformas fiscales y laborales serán elementos importantes en el incremento de la competitividad, que necesitan ser complementadas con una simplificación normativa y regulatoria. La puesta en marcha de iniciativas empresariales debería, en general, dejar de estar sometida mayoritariamente a un sistema de licencias y controles invasivos *a priori*, para pasar a regirse fundamentalmente por controles *a posteriori* aplicados según el principio de proporcionalidad. La suspicacia regulatoria de todas las Administraciones Públicas frente al emprendimiento y los empresarios cuesta a los

españoles demasiadas empresas que no nacen, demasiada mortalidad empresarial y, finalmente, demasiado empleo no creado.

Además de medidas transversales aplicables a todos los sectores deberán hacerse esfuerzos de identificación sistemática de barreras administrativas a escala sectorial. La fragmentación de la unidad del mercado nacional es un elemento fundamental de sobre coste que sufre el tejido productivo español. Incide además especialmente en la falta de competitividad de la producción española en el propio mercado nacional. Y esta falta de atractivo frente a las importaciones es quizás la manifestación más grave del problema de competitividad.

Por su parte, el comportamiento de un sector exportador relativamente eficiente, pero cuyo tamaño es comparativamente pequeño en relación con el de otras grandes economías de la UE, carece de la palanca necesaria para hacer una contribución mucho más decisiva en el medio plazo al recorte del déficit exterior y a la suavización de las restricciones externas al crecimiento de la economía. Las políticas de internacionalización podrán ayudar a mitigar este déficit en el medio plazo.

Para abordar decisivamente los problemas de la falta de competitividad frente a las importaciones y de ruptura de la unidad del mercado nacional, el Estado debiera promulgar la legislación básica o armonizadora necesaria para la implantación efectiva del principio de “legislación de origen”. Conforme a este principio, cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica debería poder circular libremente, y sin necesidad de modificación o trámite alguno, por cualquier punto del territorio español.

Los costes energéticos, y los de la electricidad en particular, son un nuevo elemento de sobre coste diferencial que afecta especialmente al sector industrial, y en general a los sectores de bienes comercializables más expuestos a la competencia internacional. La energía en España ha dejado de ser barata. Pero más allá del precio presente de la energía, lo que está lastimando la competitividad industrial es la certeza del encarecimiento futuro del precio de la electricidad como consecuencia del inevitable traslado a los

precios de los sobrecostes reconocidos y embalsados en el llamado “déficit de tarifa” que todavía no han sido traspasados a los consumidores. Un déficit generado por un sistema de primas a determinadas tecnologías de generación que encarece la electricidad más allá de lo que el Gobierno y los consumidores están dispuestos a pagar.

Que este traslado a precios sea el menor posible, que no se haga en el peor momento para la economía y que no se ponga en riesgo la viabilidad del sector industrial español ni la del propio sector energético exige recortar drásticamente los sobrecostes energéticos derivados de un sistema de primas a unas tecnologías de generación que, pese a ser todavía caras, han tenido una implantación masiva que ha excedido cualquier racionalidad. Todo ello ha dado lugar a una genuina burbuja auspiciada por la propia regulación pública.

## **ATAJAR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y GENERAR UNA SOCIEDAD DEL BIENESTAR SOSTENIBLE Y JUSTA**

El grave deterioro de las cuentas públicas también lastra la credibilidad y las posibilidades de crecimiento de la economía. Conocido es que la posición fiscal del conjunto de Administraciones Públicas pasó de un superávit del 2,2% del PIB en 2007 a un déficit del 11,2% del PIB en 2009. De estos trece puntos de deterioro algo más de cuatro puntos corresponden directamente a decisiones presupuestarias discrecionales del Gobierno socialista de nulo impacto sobre el potencial de crecimiento de la economía.

Pero además, durante el último ciclo alcista, las Administraciones Públicas españolas han estado consolidando gasto público a cuenta de ingresos coyunturales lo que ha dejado como herencia al futuro Gobierno un déficit público estructural superior al 5% del PIB.

Gran parte de este déficit estructural se acumula en los presupuestos de las Administraciones autonómicas y locales. Ello obedece a que sus modelos de financiación han fomentado la utilización de ingresos fiscales coyunturales para la expansión y consolidación de un mayor gasto público

catalogado como “gastos del bienestar” o “servicios esenciales”. Ingresos coyunturales que en gran parte han desaparecido para no volver y que, por su carácter cíclico, no debieran haber estado disponibles para su consolidación por unas Administraciones que no son capaces de interiorizar ni de ejercer las funciones de estabilización macroeconómica.

Los verdaderos servicios esenciales que la sociedad puede asumir sin comprometer su futuro son aquellos cuya prestación pueda ser financiada con ingresos tributarios estables. Ésta es su verdadera garantía de sostenibilidad. Por ello debe reducirse estructuralmente el nivel de gasto en las Administraciones locales y autonómicas y pedir responsabilidades a sus gestores.

Para eliminar las barreras a la movilidad que se derivan de la falta de integración de los sistemas autonómicos del bienestar, se hace necesario promover una sana competencia institucional y garantizar una cohesión nacional no uniformizadora a través de la Sociedad del bienestar. Para ello el Estado deberá promover, mediante la legislación básica o armonizadora, la aplicación del principio “de tarjeta única del bienestar” que permita el acceso sin trámites adicionales de cualquier ciudadano español a los servicios ofertados por todas las CCAA sean o no la suya de residencia.

La Sociedad del bienestar fomentará la responsabilidad por parte de los usuarios mediante un marco regulador nacional que, con las debidas garantías públicas, promueva la libertad de elección de los ciudadanos y el establecimiento de una sana pluralidad y competencia entre proveedores públicos y privados de servicios del bienestar.

En definitiva, para atajar de forma creíble el déficit estructural resulta imprescindible ofrecer a la sociedad y a los inversores internacionales una política fiscal y presupuestaria basada en:

- (I) la recuperación del potencial de crecimiento de la economía de modo que se revierta parte de la pérdida estructural de ingresos fiscales;
- (II) la reducción estructural del gasto público mediante la redefinición de los ámbitos de actuación de las Administraciones Públicas y la devo-



lución a la sociedad de nuevos ámbitos de responsabilidad en la forma de una pujante Sociedad del bienestar que maximice la eficiencia en el gasto público mediante:

- a. la introducción de mecanismos moderadores de la demanda, por los usuarios de las principales prestaciones del bienestar, especialmente la sanidad, como garantía de justicia y de eficiencia al evitar abusos y despilfarros que fundamentalmente perjudican a los más necesitados de un perfecto funcionamiento de estos servicios,
- b. y el uso de nuevos modelos de producción privada con responsabilidad pública para alcanzar una verdadera sociedad del bienestar con pluralidad en la oferta y capacidad de elección por la demanda;

(III) y una profunda reforma fiscal que, sin descartar subidas puntuales de algunas figuras tributarias indirectas poco distorsionantes, suponga una reducción global de la presión fiscal a medio plazo y un incremento de los incentivos al trabajo, al ahorro y a la inversión.

El efecto sobre el crecimiento de una decidida política de consolidación fiscal en España depende, fundamentalmente, de dos efectos contrapuestos:

- Los potenciales efectos “keynesianos” contractivos sobre la demanda.
- El efecto expansivo sobre las decisiones de consumo e inversión de la reducción del gasto y del déficit estructural a través de:
  - la mejora de las expectativas acerca de la senda futura de los impuestos y la deuda, y
  - la reducción en las primas de riesgo y la mejora en las condiciones de financiación del sector privado.

En las actuales circunstancias de déficit estructural y desconfianza internacional, los efectos expansivos de esta consolidación fiscal predomi-

nan claramente en el medio plazo dando lugar a que se pueda poner en marcha una política de “consolidación expansiva del gasto”. En el corto plazo, sin embargo, ambos efectos tienden a compensarse, siendo quizás todavía algo dominante el contractivo en el muy corto plazo.

Por todo ello el elemento fundamental del *policy mix* de corto plazo será el tono de la política monetaria. En este sentido, la política económica en España deberá hacer todo lo posible por propiciar unas condiciones que favorezcan la prolongación por parte del BCE del tono ultra-expansivo de su política monetaria durante los primeros trimestres de aplicación de un plan de ajuste fiscal que ataque decididamente el déficit estructural. Y esto consiste en hacer creíble el esfuerzo de consolidación fiscal. De este modo se propiciaría acomodar mediante la política monetaria el impacto de muy corto plazo de las medidas de ajuste y facilitar su éxito facilitando la “creación de empleo desde el minuto uno” de la recuperación.

La coordinación entre la política económica y la política exterior será esencial para propiciar un entorno europeo favorable. Del éxito de las medidas en España para asegurar el crecimiento y la sostenibilidad de las cuentas públicas, y alejar así definitivamente el riesgo de una crisis fiscal en nuestro país, dependerá en gran medida qué modelo de euro se podrá consolidar a futuro. Está en el interés de españoles y europeos que el euro siga siendo una moneda que irradie la estabilidad de los mejores hacia el resto de miembros del club. Este modelo es el que permitirá que, más allá de compartir una moneda única, los europeos compartamos un área económica de estabilidad, baja inflación, costes competitivos de financiación y mayor crecimiento a largo plazo.

Tras las próximas elecciones generales, España se verá obligada a realizar en apenas unos meses lo que otros países de nuestro entorno llevan haciendo los últimos años. Será un reto difícil pero que, sin duda, está al alcance de una sociedad española que ha demostrado que es capaz de alcanzar metas que ni propios ni extraños consideraban factibles –como el propio acceso al euro desde el primer momento– si cuenta con el proyecto político y el liderazgo necesarios.

## PALABRAS CLAVE

Economía española • Mercado laboral • Fiscalidad • Pensamiento económico liberal

## RESUMEN

El autor elabora en este artículo una propuesta programática para que la economía española salga de la actual crisis y sea capaz de generar empleo y oportunidades. Fernando Navarrete reclama un Gobierno que sepa dar cauce a las aspiraciones de los ciudadanos, y propone un plan de actuación basado en dos importantes reformas, la del mercado de trabajo y la del sector financiero. Plantea además poner en marcha una agenda de competitividad que cree tejido empresarial y empleo, apoyada en una política fiscal y presupuestaria que ataje el déficit. Y concluye reclamando una reinención del Estado del bienestar que lo haga sostenible.

## ABSTRACT

*In this article the author drafts a programmatic proposal to pull the Spanish economy out of the crisis so it can create jobs and opportunities again. Fernando Navarrete calls for a government able to meet citizens' aspirations, and puts forward an action plan based on two key reforms, the labour market reform and the financial sector reform. In addition, he advocates for the setting up of an agenda for competitiveness intended to the creation of a commercial network and jobs, based on a fiscal and budgetary policy geared to the reduction of the deficit. The author concludes claiming for a reinvention of the welfare state that can render it sustainable.*

# LA ILUSTRACIÓN liberal

Revista española y americana

Otoño-invierno de 2010

NÚMERO

45  
—  
46



...

MIKEL BUESA: *¿Reinsertar a los presos de ETA? Una crítica de la política penitenciaria española*

HORACIO VÁZQUEZ-RIAL: *El silencioso siglo XXI*

SANTIAGO NAVAJAS: *Las máquinas de matar ideológicas. Nazis y comunistas, retratados*

CARLOS ALBERTO MONTANER: *La segunda muerte de José Martí*

MANUEL PASTOR: *Galíndez 'versus' Durán. Espías españoles en la Guerra Fría*

JUAN CARLOS HIDALGO: *El fracaso de la guerra contra las drogas*

MANUEL LLAMAS: *El fracaso del liberalismo en su intento por limitar el poder*

MATÍAS JOVE: *Redes e identidad: ¿adiós al centro político?*

PABLO MOLINA: *La radio en España. Piratas y corsarios*

...

Manuel Ayau, **IN MEMORIAM**

...

**RETRATOS:**

Wilhelm von Humboldt · Mario Vargas Llosa, por fin Nobel

...

RESEÑAS · EL LIBRO PÉSIMO · EL RINCÓN DE LOS SERVILES

...

Y acceda a todos los números anteriores en nuestra página web

[www.lailustracionliberal.com](http://www.lailustracionliberal.com)

E-MAIL: [lailustracion@libertaddigital.com](mailto:lailustracion@libertaddigital.com)